

Acte commemoratiu de Sant Iu
Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de
Barcelona
5 de juliol de 2018

Excm. Sr. Degà del Il·ltre. Col·legi de Procuradors de Barcelona

Excm. Sr. Fiscal superior

Excmo. Presidente del Consejo General de Procuradores de España.

Ilm. Sr. Secretari de Govern del TSJC,

Excel·lentíssimes e il·lustríssimes autoritats.

Senyores i Senyors

Un any mes, els procuradors de Barcelona han escollit aquest Palau, seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per celebrar l'acte solemne central commemoratiu del seu patró, Sant Iu.

Vull agrair aquesta decisió a l'Il·ltre. Col·legi de Procuradors de Barcelona i al seu Degà, perquè ens brinda l'oportunitat de contribuir amb això a la solemnitat dels actes de celebració del vostre patró.

El simbolisme d'aquest Palau de Justícia està en sintonia amb el rellevant paper que exerceix la Procura com a col·laboradors de l'Administració de Justícia, i amb la naturalesa i legitimitat dels interessos que representeu davant seu, *-en tant que representants de les parts en el procés-*, que neixen i pertanyen a tots els ciutadans, als que ens devem els servidors públics.

Per tot allò, és un honor, com a President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, poder acompanyar-vos en aquest acte commemoratiu, pel que suposa de reafirmació com a col·lectiu professional, amb la incorporació de nous togats i el reconeixement merescut a la feina i dedicació dels que s'han mantingut en primera línia de l'activitat professional durant 25 i 50 anys.

Abans de res, vull transmetre la nostra felicitació tant als **onze** nous col·legiats, als quals avui s'han imposat les togues i lliurat els diplomes acreditatius, com als **quinze** col·legiats que han rebut el diploma, la medalla i la insígnia pels 25 anys d'exercici, també a la Sra. Ana María Roca Vila, pels 50 anys de la seva col·legiació, tot un exemple de longevitat i dedicació professional.

Solo puedo tener palabras de recuerdo y reconocimiento para la labor, trayectoria profesional y la personalidad del Excmo. Sr. **José María Romero de Tejada**, malgrado Fiscal Superior de Catalunya y merecidamente premiado con la **medalla de oro** del Il.lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona. El Fiscal Romero de Tejada fue siempre fiel al compromiso y a las responsabilidades inherentes a su cargo. Es de justicia este reconocimiento, y humano el lamento por la pérdida de un leal servidor público, entregado con total honestidad a la realización de la Justicia.

Felicitación especial merecen las personas y entidades distinguidas con el premio Procura (Josep Ballesté y Juan Córdoba Roda, premi Procura- Trajectòria professional; y Arrels Fundació, premi Procura-Solidari) que esta tarde recibirán tan prestigiados galardones.

Como recordaba al inicio, los procuradores desempeñáis un papel central como colaboradores de la Administración de Justicia. Es obligado reconocer el irrenunciable compromiso de los procuradores con el sistema de Justicia, tanto más meritorio cuanto más perceptibles resultan algunas

ineficiencias de la propia Administración de Justicia. Y ya no solo relacionadas con las carencias dotacionales de todo orden (*sedes judiciales que no reúnen condiciones mínimas para la prestación de la actividad, o un cuerpo funcional con elevados índices de interinidad y en ocasiones sin formación específica*) sino las más profundas relacionadas con nuestras debilidades estructurales, como el mantenimiento de una arcaica organización judicial desarrollada en su base en torno a los partidos judiciales, o los clamorosos desajustes de la planta judicial, cuya dotación ni de lejos se ha adecuado a los índices de litigiosidad propios de una sociedad compleja como la nuestra.

Formamos parte, tanto la Procura como los jueces, de un sistema de justicia que contempla impasible cómo los órganos judiciales se ven obligados a soportar una entrada de asuntos que en el caso de la jurisdicción civil y mercantil dobla los valores óptimos fijados por el propio CGPJ como carga de trabajo razonable. A estos escenarios de sobrecarga y evolución negativa de calidad y tiempos en la respuesta judicial, hemos llegado por el absoluto abandono presupuestario por parte de los diferentes gobiernos y responsables políticos.

De la memoria anual de 2017, recientemente aprobada en pleno de la Sala de Gobierno, se extraen algunos datos preocupantes en su proyección a futuro. El pasado año se invirtió la tendencia que se había mantenido constante desde 2011 a 2016, en que los órganos judiciales habían conseguido resolver (por tanto sacar del sistema) más asuntos de los que entraban para su conocimiento.

Ello había supuesto un descenso, lento pero progresivo, de la pendencia al final de cada uno de aquellos ejercicios. Esa tendencia se revierte en 2017, y los primeros indicadores apuntan a que la reversión se mantiene durante el presente ejercicio.

El número total de asuntos ingresados en 2017 en los órganos judiciales de Cataluña se incrementó en un 6%, el número de resoluciones finales se mantuvo prácticamente en los mismos valores que el año anterior, de forma que los asuntos en trámite al final del año se incrementaron en más de un 9%, regresando a los niveles de pendencia del año 2013.

Singular aumento se constata en la entrada de asuntos en la jurisdicción civil y mercantil (la de mayor impacto en la actividad de la Procura). Los juzgados de primera instancia incrementaron el ingreso en un 23,37% respecto del año anterior (pasando de los 128.289 a los 158.275 asuntos); aumento en el que ha tenido impacto decisivo las demandas sobre las conocidas como "**cláusulas suelo**" (en ejercicio de las *acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física*), que en los cuatro Juzgados provinciales especializados sumaron un total acumulado (entre el 1 de junio y el 30 de diciembre de 2017) de 18.078 demandas. A las que habrán de sumarse las más de 12.000 que llevamos registradas entre enero y junio del año 2018 (total 30.000 demandas).

El pasado año, en este mismo acto y a presencia de las dos Administraciones prestacionales (una de ellas representadas por la más alta instancia, el Sr. Ministro de Justicia), daba cuenta del informe desfavorable emitido por la Sala de Gobierno que presido al plan de especialización y provincialización proyectado entonces por el CGPJ para dar respuesta al aluvión de demandas en materia de cláusulas suelo y otras condiciones de la contratación hipotecaria, no porque tuviéramos recelos sobre los beneficios que reporta la especialización o incluso la provincialización del conocimiento de determinadas materias, sino porque el proyecto nacía sin asegurar una dotación de recursos extraordinarios para dar respuesta a unas demandas que ya preveíamos extraordinaria y

muy superior a la que se calculaba tanto desde el CGPJ como desde el Departament de Justicia de la Generalitat, con cuyos responsables mantuvimos varios encuentros para optimizar el plan.

Esas mismas alarmas se habían disparado en los colectivos de Abogados y Procuradores.

Transcurrido ya más de un año desde el inicio del Plan de especialización de juzgados para el conocimiento de las demandas de cláusulas suelo, se han sucedido dos prórrogas semestrales por parte del CGPJ (28 de diciembre de 2017 y 27 de junio último), que llevarán su duración al menos a finales del presente año, por lo que a las 30.000 demandas ya registradas en los cuatro juzgados provinciales de Cataluña, habrán de sumarse una medida mensual mantenida superior a las 1.500 demandas, que nos llevará al entorno de las 40.000 demandas a final de año.

Las dos prórrogas del Plan decididas por el CGPJ han sido precedidas de sendos informes desfavorables de la Sala de Gobierno, desde la constatación de la manifiesta insuficiencia de los refuerzos personales que tardíamente se han asignado a los juzgados provinciales especializados.

En el JPI 50 de Barcelona a día de hoy únicamente constan despachadas **11.900** de las casi 24.000 demandas registradas. Con los cinco jueces adscritos al Juzgado (contando con que sean mantenidos durante todo el período) y estimando una ratio de **900 sentencias por año y juez**, tardaremos entre 6 y 7 años en dar salida a las cerca de 30.000 demandas que habrán entrado a final del presente año.

Ciertamente, son tiempos de respuesta que nos hacen sonrojar y que necesitamos explicar y justificar ante los ciudadanos. La Procura es el canal más directo para la transmisión al ciudadano demandante de este

estado de situación, en cuya generación identificamos como causa primera la **posición de las entidades bancarias**, no ya solo en el otorgamientos de la cláusulas cuestionadas, sino en la demora en el cumplimiento de sus obligaciones de restitución, que sabe cierta y exigibles (el porcentaje de estimación supera el 99%)

Esta falta de cumplimiento extrajudicial del deber de restitución, la falta de una real voluntad de alcanzar soluciones pactadas como vía alternativa de resolución del conflicto, está sometiendo al sistema judicial al ímprobo esfuerzo que estamos analizando y obligando a detraer ingentes recursos públicos, tan necesarios para atender otras competencias jurisdiccionales socialmente mucho más sensibles.

La jurisdicción atribuida constitucionalmente a jueces y magistrados comprende tanto la labor de juzgar como la de hacer ejecutar lo juzgado. Si con frecuencia la decisión judicial llega en condiciones y tiempo que no satisface plenamente las expectativas de las partes, la insatisfacción puede convertirse en frustración si, obtenida sentencia, ésta no se materializa en todos sus términos.

Nuestra organización centra su esfuerzo principalmente en la fase procesal de conocimiento y no presta la atención requerida para la ejecución de lo sentenciado que, no olvidemos, es lo que mueve al ciudadano cuando acude a los tribunales de justicia.

En la ejecución de lo sentenciado asume un papel protagonista el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, pero también los Procuradores pueden contribuir a una ejecución ágil.

En las conclusiones del I Congreso de Economía y Justicia organizado por el Consejo General de Procuradores y el Colegio de Barcelona, en 15 y 16 de marzo pasado, se resaltaban las ineficiencias del

sistema de justicia civil en la ejecución de las sentencias judiciales, así como el lastre que ello supone para la economía española y, en nuestro caso, también en la catalana.

Entre las propuestas que allí se lanzaron para avanzar en la mejora del servicio público de justicia en este campo de la ejecución civil, se reclamaban consensos que superasen las reivindicaciones corporativas de los diferentes actores del sistema, al tiempo que se reclamaba la regulación de la figura del “*agente de ejecución*”, ofreciéndose la Procura para asumir ese protagonismo, en delegación tanto del tribunal como, en su caso, del letrado de la Administración de Justicia.

Solo puedo sumarme a la propuesta, como lo haría con cualquier iniciativa orientada a mejorar y agilizar la respuesta judicial. Se trata de una oferta colaborativa de consideración obligada, como obligado sería acompañarla de la introducción de los mecanismos precisos para asegurar la indemnidad de los intereses de todas las partes.

Voy terminando ya.

Quiero dejar algo de margen para el optimismo. Acabamos de asistir, a 30 de junio, a la entrada en funcionamiento de **cinco nuevos juzgados** (Primera instancia 59 de Barcelona –incapacidades-, mercantil 11 de Barcelona, Primera instancia 8 y 9 de Granollers y 8 de Badalona). Próximamente, a 30 de septiembre, entrarán también en funcionamiento **tres nuevos juzgados** de primera instancia, en Mataró, en Reus y en Terrassa; y a 31 de diciembre los **dos juzgados** de primera instancia creados en Sabadell por el Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre. Quedan no obstante, pendientes de implementación otros **4 órganos**, los juzgados de primera instancia de L’Hospitalet de Llobregat, Girona, Lleida y el mixto 9 de Vendrell, que no han sido incluidos en la Orden

JUS/1277/2017, de 22 de diciembre, a pesar de aparecer ya creados en el referido Real Decreto 902/2017.

Somos conscientes del esfuerzo que este incremento en la dotación del sistema judicial ha de suponer para el Departament de Justícia de la Generalitat como administración prestacional, pero también de que en el proceso de su implementación la Sala de Gobierno del TSJ únicamente está participado en el diseño competencial de estos nuevos órganos, manteniéndose ajeno a otros aspectos dotacionales que escapan de sus competencias. No renunciamos, sin embargo, a abrir con los responsables del Departament de Justícia un diálogo necesario para conseguir que conjunta y colaborativamente podamos llegar a dar respuesta a algunas de las necesidades más acuciantes para nuestra organización.

Finalment i per acabar aquesta intervenció, només resta animar-vos a tots, especialment als nous togats, a que, amb l'exemple dels guardonats avui, puguem afrontar els reptes que tenim per davant, posant en la seva superació tot l'afany i compromís, com estic segur que feu sempre els procuradors i demés professionals que col·laboren en la transcendent tasca de administrar Justícia.

Moltes gràcies